

EDITORIAL

Chillán no puede seguir esperando

La salida de la cárcel del centro es una medida que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes, en la seguridad urbana y en las posibilidades de desarrollo de la ciudad. La actual agenda de seguridad y el impulso inversor del Estado configuran un momento propicio. Pero, como ha ocurrido antes, la oportunidad solo se concretará si existe decisión política sostenida para transformar una demanda histórica en una realidad tangible.

La reciente reunión entre el gobernador regional, Óscar Crisóstomo, y el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, vuelve a situar en el centro de la agenda una demanda largamente sostenida por la comunidad chillaneja: el traslado del recinto penitenciario fuera del radio urbano. Se trata de una aspiración planteada desde 2008, que ha atravesado distintos gobiernos sin lograr materializarse.

Lo relevante del encuentro no es solo la coincidencia declarada respecto de la pertinencia de sacar la cárcel de su actual ubicación, sino el hecho de que esta demanda se inserta hoy en una agenda más amplia de seguridad pública que el Gobierno Regional ha impulsado con fuerza ante el nivel central. La seguidilla de reuniones con autoridades del Ejecutivo, sumada al énfasis en proyectos como la Escuela de Carabineros, forma parte de una estrategia que busca posicionar a Ñuble en la discusión nacional sobre seguridad, infraestructura y prevención del delito.

Sin embargo, la historia reciente obliga a la cautela. Durante 18 años, el diagnóstico ha sido compartido: la presencia de un penal en pleno centro de Chillán resulta incompatible con el desarrollo urbano, genera externalidades negativas en términos de seguridad y limita el potencial de revitalización de un sector clave de la ciudad. A pesar de ello, los avances han sido parciales, concentrados en estudios, anuncios y voluntades que no han logrado traducirse en obras concretas.

Hoy, el contexto ofrece una nueva oportunidad. El Ministerio de Obras Públicas ha anunciado una ambiciosa

cartera de inversión en infraestructura a nivel nacional, que incluye un plan de nuevas cárceles concesionadas con capacidad para 16 mil internos. Este impulso, que busca además dinamizar la economía y generar empleo, abre una interrogante legítima para Ñuble: ¿está Chillán considerada dentro de esta planificación?

La respuesta, por ahora, es incierta. Y esa indefinición no es menor. La condición de capital regional, el crecimiento demográfico y las propias exigencias del sistema penitenciario hacen evidente la necesidad de contar con un nuevo recinto, moderno, bien ubicado y acorde a los estándares actuales. No se trata únicamente de trasladar una infraestructura, sino de proyectar una solución integral que considere seguridad, reinserción y planificación urbana.

En este escenario, el desafío es doble. Por una parte, consolidar la voluntad política que hoy parece alinearse entre autoridades regionales y nacionales. Por otra, asegurar que esa voluntad se traduzca en decisiones concretas, con financiamiento definido y plazos claros. La experiencia indica que sin estos elementos, las iniciativas tienden a diluirse en el tiempo.

Chillán no puede seguir esperando. La salida de la cárcel del centro es una medida que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes, en la seguridad urbana y en las posibilidades de desarrollo de la ciudad. La actual agenda de seguridad y el impulso inversor del Estado configuran un momento propicio. Pero, como ha ocurrido antes, la oportunidad solo se concretará si existe decisión política sostenida para transformar una demanda histórica en una realidad tangible.